

C.A. de Concepción

Concepción, nueve de abril de dos mil veinticinco.  
VISTO:

En esta causa RIT T-152-2023, RUC 23- 4-0467104-9 del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, se ha dictado sentencia definitiva, con fecha 16 de septiembre de 2024, por la cual, se rechaza la demanda de vulneración de derechos fundamentales y subsidiaria de despido injustificado interpuesta por CARLOS MAURICIO GONZÁLEZ GUERRERO, ROMINA VALERIA FERNÁNDEZ MARIÑAN y ANDREA INZUNZA INZUNZA en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR y de la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE BIOBÍO, sin costas.

En contra de dicha sentencia, la parte demandante dedujo recurso de nulidad el que funda en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse infringido sustancialmente derechos y garantías constitucionales, concretamente, el derecho a la defensa, establecido en el 19 N ° 3, inc. 2 ; y de sobre manera, (2) la garantía establecida en el artículo 19 N ° 3, inc. 6. Solicita se anule la sentencia y retrotraiga el proceso hasta la etapa de la celebración de audiencia preparatoria de fecha 15 de mayo de 2023.

Se trajeron los autos en relación, realizándose la vista del recurso en la audiencia del pasado 3 de abril con la asistencia y alegatos de ambas partes.

#### CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º) Que para entrar al análisis de la causal de nulidad deducida, es preciso consignar los siguientes antecedentes pertinentes del proceso:

a) Se interpuso denuncia de tutela por vulneración de derechos y demanda subsidiaria por despido injustificado y cobro de prestaciones,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXLXXTZTCW

en procedimiento de tutela laboral, citándose a las partes a audiencia preparatoria, para el día 15 de mayo de 2023, a las 09:30 horas.

b) La parte demandante solicitó comparecencia telemática, conforme al artículo 427 bis del Código del Trabajo, ingresando su escrito el viernes 12 de mayo de 2023 a las 10:36 minutos.

c) El día de la Audiencia Preparatoria, lunes 15 de mayo de 2023, el demandante se mantuvo conectado a la sala de audiencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción desde las 09:30 horas, incluso a las 9:34 horas AM, remite el listado de la prueba que procedería a anunciar. A continuación, y luego de 25 minutos, se conecta la plataforma zoom sólo para indicarle que por decisión del juez de la causa, la audiencia preparatoria había sido realizada sin su presencia ya que, como consta en la respectiva resolución, el juez había decidido no dar lugar a la comparecencia telemática de la parte demandante por no haber presentado su solicitud con una antelación de dos días hábiles, según lo prescribe la norma invocada.

d) Como consecuencia directa de lo anterior, en la sentencia definitiva de fecha 16 de septiembre de 2024, SE rechazó la demanda por cuanto en la audiencia de juicio ninguna de las partes de la causa rindió prueba alguna, por lo que no se acreditó ninguno de los hechos en que se funda la demanda para invocar la declaración de una relación laboral y un despido discriminatorio.

2º) Que, como ya se indicara en lo expositivo, como primera causal de nulidad, el recurrente interpone la prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su primera parte, la cual procede cuando la sentencia definitiva *“se hubiere dictado con infracción sustancial de los derechos y garantías constitucionales...”*

Refiere que el artículo 427 Bis, fue incorporado al Código del Trabajo por la Ley N° 21.394, que Introduce Reformas al Sistema de Justicia para Enfrentar la Situación luego del Estado de Excepción



Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, cuyo objetivo es “facilitar las audiencias y vistas de las causas en los diversas Tribunales y Cortes del País”, cuyo inciso segundo del artículo 427 Bis original indicaba: “La parte interesada deberá solicitar comparecer por esta vía hasta las 12:00 horas del día anterior a la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo electrónico; a efectos de que el tribunal coordine la realización de la audiencia.” El plazo de 2 días -el cual se contempla para varios procedimientos, no solo para el de autos- que la resolución recurrida indica como incumplido y es utilizado como justificación para no autorizar la comparecencia, fue fruto de una breve observación parlamentaria en cuanto se advirtió que el dispuesto por la ley, resultaba ser extremadamente corto para que el tribunal ejecute todas las acciones conducentes al éxito de la medida. Es por dichas razones que en definitiva se acuerda reemplazar en el inciso segundo del artículo 427 Bis la frase "las 12:00 horas del día anterior a", por la expresión "dos días antes de".

Sostiene, sin embargo, en el caso de autos dicho inconveniente que de acuerdo a la historia de la ley ha sido pretendido salvar con la existencia del citado plazo de antelación de 2 días, no resulta aplicable atendido que la parte contraria compareció igualmente de manera telemática, encontrándose totalmente a disposición el link de la audiencia para ambos comparecientes a la audiencia preparatoria; su parte efectivamente pudo conectarse al link de la audiencia, e interactuar con la funcionaria a cargo de la audiencia, y con el abogado de la parte contraria, facilitándole incluso a este último la prueba documental a su correo; es decir, no existía inconveniente alguno para que su parte fuese admitido al correspondiente zoom de audiencia, y así comparecer en representación de sus representados, decidiendo, sin embargo, el juez de la causa de manera diversa, y de manera contraria al fin del espíritu del artículo 427 Bis, y en particular



de su inciso segundo, en relación al plazo de anticipación para requerir la comparecencia telemática el que en definitiva como vimos está otorgado con un fin meramente administrativo y de buen funcionamiento propio para el tribunal.

Señala que su parte estuvo imposibilitada de acceder a dicha plataforma ZOOM y poder asistir telemáticamente a la audiencia de fecha 15 de mayo de 2023 a las 09:30 horas, denegándosele su derecho a participar en la audiencia, afectando los principios de acceso a la justicia, derecho a la prueba, a la defensa, contradictoriedad y bilateralidad de la audiencia, entre otras garantías básicas del debido proceso, contempladas en la Constitución de la República y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, quedando en la absoluta indefensión.

Concluye que la decisión adoptada es errada y provoca un menoscabo o perjuicio a su parte, puesto que colocó a nuestros representados en la imposibilidad de hacer uso de derechos y garantías constitucionalmente garantizadas a todas las personas, vulnerando específicamente el compendio jurídico de normas que comprenden el debido proceso, transgrediendo concretamente entre otros, (1) el derecho a la defensa, establecido en el 19 N ° 3, inc. 2 ; y de sobre manera, (2) la garantía establecida en el artículo 19 N ° 3, inc. 6, en cuanto tal precepto dispone que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.

3º) Que la garantía fundamental del debido proceso que consagra el inciso sexto del numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que reza *“toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”*, se encuentra provista de una serie de garantías que han sido desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia, entre ellas,



se describe los siguientes derechos: a un tribunal independiente, a un juez natural, a defensa, a un debido procedimiento, a una sentencia motivada.

El Tribunal Constitucional ha definido el debido proceso señalando que *"el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso"* (STC N° 1448, 7/julio/2011). El alcance jurídico del debido proceso se expresa en el conjunto de garantías procesales, orgánicas y penales, que corresponden a un entramado complejo de instituciones que incluyen *"el oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador"* (STC N° 1518, 21/octubre/2010).

4º) Que, para la decisión del asunto, es preciso detenerse en el derecho a la bilateralidad de la audiencia, cuyo efecto es consustancial al ejercicio pleno del derecho a la defensa. Es la expresión de uno de los elementos consustanciales del debido proceso, puesto que representa la garantía procesal de la igualdad ante la justicia.

De esta manera, debemos también relacionarlo con la igualdad entre las partes, definido como el derecho al igual trato dentro del proceso para la debida protección del ejercicio de sus derechos. Lo anterior, no implica que tenga idénticos derechos procesales, cuestión que, por antonomasia, serán diferentes por la distinta posición que ocupan las partes en el proceso. Lo relevante es que se verifique el equilibrio procesal necesario otorgando igualdad de armas al interior de un procedimiento. (GARCIA PINO, Gonzalo y CONTRERAS VASQUEZ, Pablo. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL Y AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL



CONSTITUCIONAL CHILENO. Estudios constitucionales [online]. 2013, vol.11, n.2).

5º) Que, también es preciso traer a colación el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual también se deduce del artículo 19, numeral 3º, inciso 1º, de la Constitución que garantiza a todas las personas *"la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos"*.

La noción de "derecho a la tutela judicial" importa el reconocimiento de un derecho prestacional que recaba del Estado la protección jurídica debida, en el igual ejercicio de los derechos ante la justicia, y debe ser analizada en estrecha relación al debido proceso, por cuanto, el debido proceso comienza con acciones que se impetran, pero que requieren que el acceso a ella esté resuelto previamente, que existan precedentes, en un amplio sentido, motivados y conocidos, y que lo solicitado tenga garantías de cumplimiento según la naturaleza del procedimiento. Así, el Tribunal Constitucional sostiene que el *"artículo 19, número 3º inciso quinto, de la Constitución establece el derecho a las garantías de un racional y justo procedimiento, que se traducen conjuntamente con el derecho a la acción y la legalidad del juzgamiento, en el logro de la tutela judicial efectiva"*.(STC N° 1130, 7/octubre/2008).

6º) Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 427 bis del Código del Trabajo, "el juez podrá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de las partes que así lo solicite, a una o varias de las audiencias judiciales de su competencia que se verifiquen presencialmente en el tribunal, si cuentan con los medios idóneos para ello y si, en su opinión, dicha forma de comparecencia resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión. La parte interesada deberá solicitar comparecer por esta vía hasta dos días antes de la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo electrónico, a efectos de que el tribunal coordine la realización de la audiencia. Si no



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXLXXTZXCW

fuere posible contactar a la parte interesada a través de los medios ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no ha comparecido a la audiencia...”.

Tal artículo fue introducido al Código del Trabajo por la Ley 21.394 de 30 de noviembre de 2021, que introdujo reformas al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.

7º) Que, resulta evidente que la tutela judicial se encuentra modulada en un debido proceso, estructurado bajo reglas de racionalidad instrumental o adjetiva.

Si bien, ello importa una serie de requisitos, límites y condiciones para ejercer el derecho, todas materias propias de los procedimientos que establece la ley, ellos no pueden transformarse en desproporcionados o arbitrarios, que impidan o hagan ilusorio el derecho.

En consecuencia, el derecho a la tutela judicial *"no es un derecho absoluto ejercitable en todo caso, sino que dicho derecho debe ejercerse dentro del proceso legalmente establecido, cumpliendo los requisitos fijados razonablemente a fin de no limitar o afectar sustancialmente el derecho complementario a la defensa"*. (Nogueira Alcalá, Humberto; El Debido Proceso en la Constitución y en el Sistema Interamericano, Librotecnia. 2007).

8º) Que, en estas condiciones, es posible concluir que la decisión del juez a quo de rechazar la comparecencia telemática del demandante, carece de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que el plazo previsto por el legislador para solicitar tal modalidad tiene por objeto prever la disponibilidad de medios electrónicos y la habilitación de las dependencias al efecto, debiendo cuidar el tribunal que con la comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de las partes que así lo solicite, resulte suficientemente eficaz y no cause indefensión,



situación que no acontecía en autos, desde que la parte demandada ya había sido habilitada a su participación remota que ejerció en la misma audiencia en la que el actor fue impedido.

9º) Que, por lo razonado, concurre el motivo de nulidad hecho valer, por cuanto en autos se ha producido la vulneración del debido proceso en lo que dice relación al derecho a la bilateralidad de la audiencia e igualdad de partes y, se ha limitado arbitrariamente el ejercicio de la acción con evidente infracción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, todas garantías constitucionales establecidas en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuya procedencia se enmarca dentro de la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 427 bis, 430, 477 y 482 del Código del Trabajo, SE ACOGE, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Benny Opazo Sobarzo, en representación de los denunciantes en procedimiento de Tutela Laboral, en contra de la sentencia de dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, en consecuencia, SE ANULA la sentencia y el procedimiento desde la audiencia preparatoria en adelante y SE RETROTRA la causa al estado de celebrarse una nueva audiencia preparatoria por un juez no inhabilitado; debiendo continuar la tramitación de la causa hasta la dictación de una nueva sentencia definitiva.

Regístrese y devuélvase por la vía correspondiente.

Redacción de la Ministra Carola Rivas Vargas

Rol N° 743-2024 Laboral.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXLXXTZXCW





Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXLXXTZXCW

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Rodrigo Cerda S., Carola Rivas V., Gonzalo Rojas M. Concepcion, nueve de abril de dos mil veinticinco.

En Concepcion, a nueve de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

